

Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En los autos N°11-12, denominada “episodio Luis Heriberto Contreras Escamilla y otro”, Rol Corte de Apelaciones de San Miguel N° 1.442-2021, por sentencia de primera instancia, dictada por la Ministra de Fuero señora Marianela Cifuentes Alarcón el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, escrita de fojas 4.179 y siguientes, condenó a **Alfonso Faúndez Norambuena y a Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau**, a sufrir cada uno la pena de **seis (6) años** de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y pago de las costas, como **autores** del delito consumado de **secuestro calificado** de Luis Heriberto Contreras Escamilla, previsto y sancionado en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, en relación con el inciso primero del mismo artículo; y a la pena de **cuatro (4) años** de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como **autor** del delito consumado de **sustracción de persona mayor de diez años y menor de dieciocho años**, previsto y sancionado en el inciso penúltimo del artículo 142 del Código Penal, perpetrado en la persona de Luis Heriberto Contreras Peñaloza, ambos ilícitos cometidos a partir del día 10 de noviembre de 1973.

La misma sentencia condenó a Sergio Heriberto Ávila Quiroga y a Roberto Arcángel Rozas Aguilera, a sufrir cada uno la pena de **tres (3) años y un (1) día** de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta



perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como **autores** del delito consumado de **secuestro calificado**, perpetrado en la persona de Luis Heriberto Contreras Escamilla; y a la pena de **quinientos cuarenta un (541) días** de presidio menor en su grado medio y las accesorias de suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, como **autores** del delito consumado de **sustracción de persona mayor de diez años y menor de dieciocho años**, previsto y sancionado en el inciso penúltimo del artículo 142 del Código Penal, antes mencionado.

Además, se dispuso el cumplimiento de las penas privativas de libertad antes mencionadas de manera efectiva, a excepción del sentenciado Rozas Aguilera, respecto de quien se ordenó la suspensión de la pena corporal impuesta, concediéndosele el beneficio de libertad vigilada, por el término de cinco años.

Finalmente, en el aspecto civil, se acogió la demanda enderezada por los querellantes **Eloísa del Carmen Peñaloza Méndez, Juana Elisa Contreras Peñaloza y Luis Heriberto Contreras Peñaloza**, condenando al Fisco de Chile a pagar a la primera, la suma de ciento cuarenta millones de pesos (\$140.000.000), a la segunda, la suma de cien millones de pesos (\$100.000.000) y, al último, la suma de ciento ochenta millones de pesos (\$180.000.000), por concepto de daño moral, en sus calidades de cónyuge y madre de las víctimas de los ilícitos, la primera; hija y hermana de las mismas víctimas, la segunda; e hijo y víctima directa de uno de los ilícitos, el último de los nombrados.

Impugnada esa decisión, una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, **revocó** la



sección del fallo que **condenaba** a los acusados **Sergio Heriberto Ávila Quiroga y Roberto Arcángel Rozas Aguilera** de las acusaciones formuladas en su contra de ser autores de los delitos de secuestro calificado y sustracción de persona mayor de diez años y menor de dieciocho años; y se decide, en cambio, que se les **absuelve** de los mencionados cargos.

En lo demás, **se confirmó** la aludida sentencia, **con declaración** que el acusado **Alfonso Faúndez Norambuena** queda condenado a la pena de **diez (10) años y un (1) día** de presidio mayor en su grado medio, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de **autor** del artículo 15 N°3 del Código Penal, del delito consumado de **homicidio calificado**, cometido el 15 de noviembre de 1973, en la persona de Luis Contreras Escamilla; y a la pena de **cuatro (4) años** de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, como **autor** del delito consumado de **sustracción de persona mayor de diez años y menor de dieciocho años**, previsto y sancionado en el inciso penúltimo del artículo 142 del Código Penal, perpetrado en la persona de Luis Heriberto Contreras Peñaloza, ilícito cometidos a partir del día 10 de noviembre de 1973.

Asimismo, se aprobó el sobreseimiento parcial y definitivo de esta causa, por fallecimiento, respecto del acusado Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau.

Contra dicha sentencia, el abogado Maximiliano Murath Mansilla en representación del condenado Alfonso Faúndez Norambuena; y el letrado Nelson



Caucoto Pereira en representación de los querellantes Eloísa del Carmen Peñaloza y Luis Heriberto Contreras Peñaloza, formalizaron recurso de casación en el fondo.

Por su parte, el abogado Ilan Sandberg Wiener, en representación del Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo, en contra de la misma sentencia.

Por decreto dictado con fecha dos de marzo de dos mil veintidós, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I. En cuanto al recurso de casación en la forma:

1º) Que el abogado Ilan Sandberg Wiener, en representación de la parte querellante Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dedujo recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de segunda instancia, fundado en la causal contemplada en el artículo 541, numeral noveno, en relación a los requisitos cuarto y quinto del artículo 500, todos del Código de Procedimiento Penal, denunciando que la sentencia no contiene las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados los hechos atribuidos a los procesados, como tampoco razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, infracción incurrida, en primer lugar, al absolver a los acusados Ávila Quiroga y Rozas Aguilera, limitándose para ello a eliminar de la sentencia de primer grado, toda referencia realizada a estos acusados al analizar su participación en los hechos, al tiempo que en el considerando quinto de la



sentencia impugnada, tiene por reproducido íntegramente los hechos establecidos por la judicatura de primer grado, incluyendo en la descripción de ellos a los acusados Ávila Quiroga y Rozas Aguilera, circunstancia que es ratificada en el considerando 13° de la misma sentencia, en que expresa su decisión, declarando *“sin alterar los hechos de la acusación, ni los establecidos en la sentencia de primera instancia”*, evidenciándose con ello una contradicción insalvable entre ambos fundamentos.

Añade que también se ha incurrido en el vicio formal denunciado, desde que en el considerando 13°) de la sentencia de segundo grado se decide recalificar el hecho perpetrado en contra de Luis Contreras Escamilla, como constitutivo del delito de homicidio calificado, manteniendo el considerando 19° de la sentencia de primer grado, y con ello, los fundamentos que tuvo en consideración para calificar los mismos hechos como constitutivos del delito de secuestro calificado, limitándose a sustituir la voz “secuestro calificado” por el de “homicidio calificado”, así como las referencias normativas que dicho considerando contenía respecto al primer ilícito, manteniendo con ello, argumentos que estima jurídicamente incompatibles a las razones que esgrime para recalificar los hechos al delito de homicidio calificado.

En razón de lo anterior, concluye que la sentencia impugnada omite fijar claramente los hechos que tiene por establecidos y fundamentar adecuadamente las razones que tuvo en consideración para su otorgamiento, de manera tal que no incurra en errores, arbitrariedades o contradicciones en cuanto a qué hechos constituyen el sustrato fáctico de las imputaciones, como tampoco en cuanto a su calificación jurídica, como ocurre en la especie.



Solicita se anule la sentencia y se dicte en su reemplazo una que condene a los acusados a las penas que corresponda, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Contreras Escamilla, o se dicte otra que se estime conforme a la ley y al mérito del proceso, con costas.

2º) Que siendo un hecho notorio que el sentenciado Sergio Heriberto Ávila Quiroga falleció el 30 de julio de 2022, se omitirá pronunciamiento respecto del recurso de casación en la forma deducido a su respecto, debiendo el señor Ministro en Visita Extraordinario dictar la resolución que en derecho corresponda, como se dispondrá en definitiva.

3º) Que para resolver el recurso en examen, resulta necesario tener en cuenta que la causal prevista en el artículo 541 N°9 del Código de Procedimiento Penal, se configura cuando la sentencia no contiene *“Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta”*.

El presente motivo tiene, según constante jurisprudencia, un carácter esencialmente objetivo, y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo a fin de constatar si existen o no los requerimientos que compele la ley, sin que corresponda decidir sobre el valor o la legalidad de las afirmaciones que de él se desprenda (SCS Rol N° 28310-18 de 21 de septiembre de 2021, Rol N° 33661-19 de 25 de junio de 2022, Rol N°22379-2019 de 17 de octubre de 2022, Rol N° 57995-22 de 29 de noviembre de 2022 y Rol N°29911-18 de 30 de noviembre de 2022).



4º) Que no está de más recordar, que la exigencia del legislador respecto de la inclusión de los razonamientos del juez fallador en sus dictámenes cumple el objetivo de evitar arbitrariedades en sus resoluciones, y es a la luz de este pensamiento que se han contemplado las normas relativas a los contenidos de las sentencias y, sobre todo, la sanción a su vulneración a través del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, por ser la fundamentación de las sentencias una garantía de la correcta administración de justicia.

5º) Que, de un atento estudio de la sentencia impugnada, se constata que ella no adolece de las falencias denunciadas, en los términos acotados en la reflexión anterior, pues en el fundamento 13º) se explican las consideraciones en cuya virtud se califican los hechos que afectaron a Luis Contreras Escamillas como constitutivos del delito de homicidio calificado, en tanto que en los fundamentos 19º), 20º), 21º) y 22º), se explicitan los fundamentos que le sirven de soporte, para absolver de responsabilidad al acusado Rozas Aguilera, a la luz de los hechos establecidos en la sentencia de primer grado.

6º) Que, en efecto, respecto a las contradicciones denunciadas en cuanto a la calificación jurídica efectuada por la judicatura recurrida a los hechos establecidos por el sentenciador de primer grado, en el considerando 13º) antes aludido, sobre el particular, se señaló: *“...de conformidad con los hechos establecidos, si bien podríamos estar en presencia de alguna figura de secuestro y/o de apremios ilegítimos, conforme al principio de consunción, las conductas ilícitas cometidas como antecedentes, medios, etapas de desarrollo o consecuencias, deben considerarse absorbidas por el homicidio calificado, ya que se trata de una figura que le prefiere en razón de exigir una mayor lesividad por*



afectar el bien jurídico del derecho a la vida. Por estas razones, el homicidio calificado subsume las otras figuras penales que pudieran concurrir en el presente caso”.

De ello es dable concluir que la contradicción denunciada no ha sido tal, pues la sentencia impugnada expresamente declara que los hechos podría constituir los delitos de secuestros y apremios ilegítimos, pero a la vez refiere que, en virtud del principio de consunción, quedan absorbidos en el injusto por el que finalmente se decide condenar a los partícipes del mismo, de ahí entonces que no resulte necesario modificar los hechos que se han tenido por acreditado por la judicatura del grado, expresando las razones jurídicas que se tuvieron en consideración para resolver en los términos que fue decidido.

7º) Que, por su parte, en cuanto a la participación atribuida al sentenciado Roberto Rozas Aguilera, en el fundamento 18º de la sentencia dictada por la Magistratura de primer grado, entre los hechos que se tienen por acreditados, y que la sentencia impugnada reproduce íntegramente, se considera: *“...en el contexto temporal antes indicado, cumplieron funciones en el mencionado campo de prisioneros, como interrogadores, el Subteniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el Teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces -actualmente fallecido- y Roberto Arcángel Rozas Aguilera”.*

8º) Que, al mismo tiempo, en el considerando 19º) de la sentencia objetada, se expresan las exigencias dogmáticas de la coautoría y de la teoría del dominio funcional del hecho, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, para concluir en el fundamento 20º) que *“...las pruebas mencionadas por la sentenciadora, en los*



considerandos 25° y 26°, resultan a lo menos imprecisas y, más todavía, de carácter vaporoso. En efecto, la prueba rendida en estos autos no tiene la intensidad suficiente como para construir un reproche penal a un nivel de exigencia típica conforme lo exige la coautoría, o en los planos más atenuados de responsabilidad penal, como son la complicidad y el encubrimiento”, exponiendo a continuación las razones por las que estima imprecisas e insuficientes las declaraciones del testigo Ricardo Valdivieso Ríos y Hugo Jesús Medina Leiva, desde que, concluye, “...no hay una sindicación directa de participación del acusado en los tres ítems identificados por el tribunal a quo en la sentencia que se revisa, es decir, detención sin causa legal de Luis Contreras Escamilla y de Luis Contreras Peñaloza, el encierro de ambos en el campo de prisioneros del Cerro Chena y la posterior ejecución y muerte de Luis Contreras Escamilla”.

En el mismo fundamento - 20°) -, la judicatura recurrida luego analiza los testimonios prestados por Mario Campos Ripley y Oscar Vergara Cruces, concluye “...no se puede colegir, de manera indefectible, de que Rozas haya participado en los interrogatorios de los detenidos en el campo de prisioneros, y que haya formado parte de un grupo de oficiales concertado previamente para cometer ilícitos contra los detractores del gobierno. Más bien esta Corte ha resultado persuadida de que su intervención en las situaciones ocurridas al interior de tal lugar de reclusión no lo fueron de manera significativa, puesto que su participación quedaba limitada a proporcionar antecedentes policiales de las personas que eran trasladadas al campo de prisioneros”.

De la misma forma, en el fundamento 21° de la sentencia objetada, se analiza la prueba documental allegada sobre este acusado, reiterando que esta



“carece de la aptitud suficiente como para endilgar a... Roberto Rozas una responsabilidad criminal respecto de los delitos cometidos sobre las personas de Luis Contreras Escamilla y Luis Contreras Peñaloza”.

Finalmente, en el motivo 22° siguientes, concluye *“...en lo que refiere a... Roberto Rozas Aguilera, no hay indicios suficientes para construir una presunción de responsabilidad en calidad de coautoría, con concierto previo, a manera de distribución de funciones para la consecución de un fin previamente establecido y consensuado, con intención o voluntad de permanencia en el tiempo a objeto de cometer ilícitos. Tampoco la hay, como se ha dicho, para achacarles responsabilidad en calidad de cómplices o encubridores. Así, la prueba rendida resultó insuficiente como para el logro del estándar de convicción establecido en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, de manera tal que esta Corte les absolverá respecto de los cargos formulados en su contra”.*

9°) Que, como se observa, si bien el hecho ilícito establecido da cuenta que Roberto Rozas Aguilera, a la época de ocurrencia de los hechos investigados, se desempeñaba como interrogador en el campo de prisioneros situado en el Cerro Chena, la sentencia impugnada al momento de efectuar el juicio de culpabilidad en el injusto penal, precisa que no se acreditó que Rozas Aguilera haya tenido una participación significativa en los hechos que afectaron a las víctimas Luis Contreras Escamilla y Luis Contreras Peñaloza, que pudiera ser considerada propia de coautoría, complicidad o encubrimientos; realizando de esa manera una mayor precisión de lo que se estimó acreditado por el tribunal de primer grado, por lo que la contradicción o incompatibilidad denunciada no ha sido tal.



10°) Que, por lo expuesto y dado que el fallo que se impugna ha cumplido con las exigencias que se denuncian omitidas, lo que se advierte de su examen, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, resulta que los defectos en que descansa la motivación de nulidad del libelo no la conforman, porque no existen, no siendo entonces exactas las transgresiones imputadas al fallo en estudio, por lo que no ha podido configurarse la causal de invalidación formal esgrimida por la parte querellante Unidad Programa de Derechos Humanos, la que habrá de ser desestimada.

II. En cuanto a los recursos de casación en el fondo:

11°) Que el libelo recursivo interpuesto por la defensa de **Alfonso Faúndez Norambuena**, deduce recursos de casación en el fondo, haciendo valer simultáneamente las causales descritas en los cardinales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando la infracción a los artículos 488 N° 1 y 2, primera parte, del mismo Código, en relación a los artículos 1, 14, 15, 141 y 391 del Código Penal y artículos 109 y 456 bis del Código de Procedimiento Penal, esto es, haberse vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción influyó substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, en relación a la errónea determinación de la participación de su representado, calificándolo erradamente como autor de los ilícitos, cuando éste debió ser declarado absuelto, según lo dispuesto el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal.

Señala que los jueces del fondo, para intentar acreditar la presunta participación de su representado, construyen una presunción judicial, sobre la base de una premisa falsa y no probada, como sería el hecho que Faúndez Norambuena habría estado a cargo del campo de prisioneros del Cerro Chena,



sólo o en conjunto con el Capitán de la época a cargo del mismo, sin explicar mayormente porqué sería cierta, señalando de manera escueta que el hecho de ostentar el cargo de teniente y estar en el predio del Cerro Chena, lo transforma en el Jefe del Recinto, a pesar de haber varios capitanes y varios tenientes más antiguos que él (todos los cuales no menciona), de estar absolutamente identificado el único y verdadero encargado de dicho campo de prisioneros y porque del análisis del expediente, y del análisis de los demás episodios y casos que dicen relación con el lugar de detención denominado “la casa de techo rojo o Campo de Prisioneros” – que individualiza-, se puede concluir que el sub-teniente Faúndez no estaba a cargo de dicho recinto de detención.

Entonces, a partir de una verdad judicial, construida en razón a cinco sentencias distintas, en razón a la contundente prueba en dichos procesos y en éste –los que menciona-, el recurrente postula que ya no es posible sostener la acusación fiscal y particular en orden a creer que el encargado del campo de prisioneros era su representado, lo que implica rechazar la acusación y concluir que éste no ordenó, forzó o indujo a otro a realizar el delito investigado en autos, y por lo tanto, ya no puede considerarse este elemento como aquella premisa base sobre la cual se construye la autoría de cooperación del artículo 15 numeral 3º del Código Penal.

Concuerda con la sentencia, en cuanto que a su representado no resulta posible imputar algún otro tipo de autoría, desde que no se acreditó quién detuvo a las víctimas de autos, ya que sólo se sabe que fueron militares de dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo, como tampoco se acreditó quién o quiénes habrían dado muerte a una de ellas. Por el contrario, quienes perpetraron



los ilícitos, fueron los militares de una dotación diversa a la que conformaba la 2ª Compañía encuadrada en el Cerro Chena, es decir, los presuntos autores de la detención de la víctima son soldados y oficiales de otra dotación distinta a los que se encontraban en el Cerro Chena, dejando fuera de toda posibilidad a su representado de esta acción.

Añade que al estar demostrado que su defendido no ordenó la detención, ni ordenó la mantención de privación de libertad, ni ordenó su fusilamiento, ni los fusiló; no es posible condenarlo de algunas de estas conductas y por lo tanto, no es posible adquirir convicción sobre ellas y condenarlo como autor, puesto que lo contrario supone la responsabilidad de mi representado por el solo hecho de ser teniente, lo que implica de suyo una vulneración legal al principio de responsabilidad subjetiva que debe imperar en nuestro sistema penal.

En este punto, asegura, la sentencia impugnada incurre en un error grave de fijación de los hechos de prueba como ciertos, toda vez que ha fijado hechos falsos y no probados como verdaderos, no siendo tampoco éstos múltiples, vulnerando las normas que regulan la prueba de las presunciones judiciales, dispuestas en el artículo 488 numeral 1º y 2º del Código de Procedimiento Penal.

Agrega que la sentencia recurrida concluyó que su defendido habría cooperado concertadamente con aquellos que secuestraron a las víctimas y que mataron a una de ellas. Pero esta hipótesis es imposible de probar, porque para cooperar con el autor directo e inmediato, se debe determinar quiénes son los autores materiales, cuestión que la sentencia recurrida no pudo comprobar, por lo tanto, se debe descartar la hipótesis legal de la autoría del cooperador concertado del artículo 15 N° 3 del Código Penal, además de no especificar cuál sería la



conducta desplegada de cooperación en relación a esta víctima, incumpliendo una de las premisas para atribuir este tipo de responsabilidad.

Entonces, habiéndose demostrado que los hechos bases sobre los cuales se construyó la presunción de culpabilidad de Faúndez Norambuena no son hechos múltiples, reales ni probados, sino que son hechos falsos y a lo menos controvertidos, ya no es posible construir con ellos una presunción judicial según los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, configurándose la segunda causal de casación en el fondo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 546 numeral 1° del Código de Procedimiento Penal, toda vez que los hechos que finalmente fueron establecidos y probados no permiten calificar a la conducta desplegada por su representado, como de autoría establecida en el artículo 15 del Código de Penal, en relación al artículo 1 y 14 del Código Penal, y artículos 141 y 391 del Código Penal, puesto que su defendido debió ser absuelto de los cargos formulados en su contra.

Solicita se anule la sentencia impugnada y se dicte en su reemplazo otra que lo absuelva de los cargos formulados en contra de su defendido, por falta de participación.

12°) Que, el abogado Nelson Caucoto Pereira, en representación de los querellantes, deduce recurso de casación en el fondo en contra de la misma sentencia, invocando las causales previstas en el numeral séptimo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, al haberse infringido las leyes reguladoras de la prueba contenidas en los artículos 108, 109 y 488 N°1 y 2 del mismo Código y los artículos 15 N° 3 y 141, inciso cuarto, del Código Penal, al haber decidido absolver a los acusados Sergio Ávila Quiroga y Roberto Rozas Aguilera de su



participación en los delitos cometidos en perjuicio de Luis Contreras Escamilla y de Luis Contreras Peñaloza.

Las infracciones a las leyes reguladoras de la prueba en la que incurre el fallo de alzada, se configuran, en opinión del recurrente, al haberse desconocido el valor probatorio de las evidencias graves, precisas, múltiples y concordantes que se produjeron en el proceso en cuanto a acreditar la autoría que le fue atribuida a estos encartados, lo que condujo a su absolución, en función a razonamientos que considera equivocados, omitiendo valorar las declaraciones indagatorias de estos encartados, en que reconocen haber sido destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo ubicada en el Cerro Chena, en la misma época en que las víctimas del proceso estuvieron reclusos en ese lugar, aunque refieren haber realizado labores relacionadas con información policial de los detenidos, precisando Rozas Aguilera que, además, le correspondió identificar y entrevistar a los detenidos. Además, la sentencia impugnada omite ponderar la declaración del testigo Ricardo Allup Rojas quien refirió haber sido recluso en el campo de prisioneros Cerro Chena junto a las víctimas de autos, tiempo en que escuchó nombrar a Pinto, Faúndez y Magaña, encargados de las torturas en las carpas; declaración del testigo Ricardo Valdivieso Ríos, quien sindicó al Teniente de Carabineros Sergio Ávila Quiroga como el efectivo que lo detuvo, interrogó, torturó y envió al campo de prisioneros del Cerro Chena, en la misma época en que las víctimas de autos fueron conducidas a dicho lugar; testimonio de Germán Nicolás Pérez Soto, quien refirió que en el tiempo que fue detenido en la “casa de techo rojo”, fue interrogado por el Capitán Pinto Pérez, el Teniente Faúndez y el Teniente Magaña, entre otros; declaración de Víctor Raúl Pinto Pérez, quien indica al Teniente Alfonso



Faúndez Norambuena, dos funcionarios de Carabineros y tres funcionarios de la Policía de Investigaciones como encargados de los interrogatorios en el Cerro Chena, lugar donde sí hubo algunos fusilamientos; declaración de Mario Jesús Campos Ripley, quien manifestó que en la época de los hechos estaba a cargo de la Inspectoría de la Policía de Investigaciones de la comuna de San Bernardo y que a petición de la Jefatura de la Escuela de Infantería de San Bernardo, dispuso que los oficiales Oscar Vergara y Roberto Rozas colaboraran con la identificación de los detenidos que se encontraban privados de libertad en el cuartel de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena, permaneciendo en el lugar un par de meses; declaración de Oscar Hernán Vergara Cruces, quien refirió que después del 11 de septiembre de 1973, junto al Detective Roberto Rozas Aguilera, fue asignado al Cuartel de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena, con el fin de prestar colaboración con el interrogatorio de detenidos, debiendo consignar en una ficha los datos personales de los detenidos y si habían recibido instrucción militar, agregando que los interrogatorios se realizaban en un lugar aledaño a la “casa de techo rojo”, labor que el testigo cumplió por quince a veinte días, entre 8:30 y 12:30 horas y, luego, de 14:30 a 18:30 horas; que vio al interior de la “casa de techo rojo” al Teniente Faúndez, quien efectuaba labores de inteligencia. Que también colaboraba en el lugar el Teniente de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo Sergio Ávila Quiroga.

A estos testimonios, se agregan los oficios reservados emanados de los respectivos destacamentos de personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile, en los que consta que entre los años 1973 y 1974, el



Teniente Sergio Heriberto Ávila Quiroga conformaba la dotación de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo, en tanto que el detective Roberto Arcángel Rozas Aguilera integraba la Inspectoría de San Bernardo, en igual periodo, junto a Mario Jesús Campos Ripley.

Asegura que de estos elementos probatorios, la sentenciadora de primer grado tuvo por acreditado que en el cuartel de la Escuela de Infantería funcionó una comunidad represiva compuesta por funcionarios del Ejército, de Carabineros y de Investigaciones, agrupación represiva multisectorial que se dedicó a la represión en el sector Sur de Santiago, persiguiendo opositores políticos al régimen de facto desde la comuna de El Bosque hasta las zonas aledañas a Paine, víctimas entre las cuales se encuentran Luis Contreras Escamilla y Luis Contreras Peñaloza.

Por ello concluye que no resulta lógico condenar sólo a los Sres. Magaña Bau y Faúndez Norambuena, desde que en las labores represivas antes referidas, también participó personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile, entre ellos Sergio Ávila Quiroga y Roberto Rozas Aguilera, por lo que participaron en los hechos de manera directa y determinante, máxime si ambos se situaban en el lugar de los hechos al momento de su ocurrencia.

Solicita se anule la sentencia y se dicte una en su reemplazo que condene a Sergio Heriberto Ávila Quiroga y Roberto Arcángel Rozas Aguilera como autores de los delitos de secuestro calificados de Luis Contreras Escamilla y sustracción de persona mayor de 10 años y menor de 18 años cometido en contra de Luis Contreras Peñaloza.



13°) Que, por último, el abogado Ilan Sandberg Wiener, en representación del querellante **Unidad Programa de Derechos Humanos**, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dedujo recurso de casación en el fondo, invocando la circunstancia cuarta en relación a la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, al haberse infringido los artículos 488 N°1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 7, 14, 15 N°1 y 141, inciso tercero, del Código Penal vigente a la época de ocurrencia de los hechos.

Refiere que el criterio de imputación desarrollado por la Juez de primer grado, respecto a los acusados Sergio Ávila Quiroga y Roberto Rozas Aguilera, es que en el contexto del funcionamiento del cuartel de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena, los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973, pasaron por sus instalaciones un número importante de personas que fueron sometidas a interrogatorios y malos tratos, con el fin de obtener información acerca de sus actividades políticas, entre ellos, Luis Contreras Escamilla. En ese centro de detención, actuaron diversos agentes del Estado, sobre la base de una estructura y funciones que tuvieron como propósito mantener privados de libertad, custodiar, interrogar y torturar a los detenidos. El aporte de cada uno de estos agentes resultó esencial para que los hechos investigados ocurrieran. La sentencia de primer grado concluyó que Ávila Quiroga y Rozas Aguilera tuvieron dominio funcional de la privación de libertad de las personas que se encontraban detenidas, entre ellas, las víctimas, desde que estuvieron a cargo de interrogarlas, pudiendo controlar a los soldados que estaban a cargo de su custodia.



Añade que al existir una contribución funcional en la comisión de los ilícitos que le fueron atribuidos a los acusados, en cuanto tuvieron una intermediación clara, reconocida y prolongada en el tiempo con el encierro de las víctimas, tenían control sobre ellas, y al interrogar detenidos en el referido cuartel, en la misma época en que las víctimas permanecieron encerradas allí, los acusados han desplegado conductas dolosas que han contribuido a la mantención del encierro de esas víctimas.

A pesar de ello, la sentencia de segundo grado decidió absolverles, por considerar que no existió una participación directa en interrogatorios, en la entrega de información sobre los detenidos, ni en la estructura de mando y funcionamiento del centro de detención que alojó la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicada en el Cerro Chena, a pesar que la sentencia impugnada no controvierte la comprobación de la conducta desplegada por estos acusados, que la sentenciadora de primer grado les atribuye.

Añade que la sentencia objetada, al calificar los hechos que afectaron a Luis Contreras Escamilla, restó relevancia a las conductas que le fueron atribuidas a Ávila Quiroga y Rozas Aguilera, consistentes, como se señaló, en el dominio de la privación de libertad y en las instancias de interrogatorio que desarrollaban con los detenidos, máxime si el encierro de esta víctima se prolongó por cerca de cinco días.

En cuanto a la participación en los hechos de los acusados Ávila Quiroga y Rozas Aguilera, se encuentra debidamente acreditada, con la declaración de Eloísa Peñaloza Méndez, Luis Contreras Peñaloza, Ricardo Robinson Allup Rojas, Raúl Orlando Muñoz Corvalán, el mérito del informe de autopsia elaborado por el



Servicio Médico Legal y el informe pericial médico forense respecto de la víctima Luis Contreras Escamilla; la declaración de los testigos Manuel Humberto Ahumada Lillo, Ricardo Valdivieso Ríos, Germán Pérez Soto, Irma Parada González y Blanca Villanueva Pozo, todos quienes dieron cuenta de la detención del Sr. Contreras Escamilla, su estadía y el tratamiento que recibió en la Escuela de Infantería de San Bernardo.

En cuanto al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo y su funcionamiento, consta la declaración de Víctor Raúl Pérez Pérez, Eusebio del Tránsito Ruiz Flores, Carlos Alberto Schmidtchen Vivanco, testigo de identidad reservada, Juan Carlos Cáceres Gatica, Manuel Eduardo Flores Carrasco, Hugo Jesús Medina Leiva, Gumercindo Oyarzún Pacheco, Mario Jesús Campos Ripley, Oscar Hernán Vergara Cruces, Héctor Bonilla Salazar y las declaraciones indagatorias de Ávila Quiroga y Rozas Aguilera, todos los que permiten tener por acreditado que los hechos investigados ocurrieron en la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el centro de detención que funcionaba en su interior, lugar en que don Luis Contreras Escamilla estuvo ilegalmente privado de libertad entre los días 10 y 15 de noviembre de 1973; que Sergio Ávila Quiroga como integrante de la Sexta Comisaría de San Bernardo y Roberto Rozas Aguilera, integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, fueron destinados a prestar funciones como enlace en el referido recinto militar; que ambos acusados integraron la estructura de funcionamiento del referido recinto de detención y desarrollaron interrogatorios a personas que se encontraban recluidas en ese lugar; durante los días en que Luis Contreras Escamilla estuvo detenido en Cerro Chena, fue objeto de torturas por parte de agentes del Estado que desempeñaban



labores represivas, y que le pudieron haber provocado la muerte, independiente de los disparos que se percutaron en su contra.

De estos hechos, acreditados legalmente, es posible presumir judicialmente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que Sergio Ávila Quiroga y Roberto Rozas Aguilera tuvieron participación en calidad de autores, de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en el delito de secuestro calificado cometido en contra de Luis Contreras Escamillas.

Por consiguiente, al no haberse valorado por la judicatura de segundo grado, los elementos probatorios antes referidos, se infringió lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 488 antes referido, lo que condujo a su absolución.

Solicita, se anule la sentencia, se dicte una en su reemplazo que condene a Sergio Ávila Quiroga y Roberto Rozas Aguilera en calidad de autores en el delito cometido en la persona de Luis Contreras Escamilla, a las penas establecidas en la ley.

14°) Que, para la adecuada resolución de los arbitrios interpuestos, como cuestión preliminar, conviene recordar los hechos que el fallo de primer grado, en su considerando décimo octavo, tuvo por establecidos y que el de alzada hizo suyos.

“1° Que el 10 de noviembre de 1973, en horas de la noche, soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo, detuvieron, sin derecho, a Luis Heriberto Contreras Escamilla, militante del Partido Socialista, en su domicilio, ubicado en pasaje Porto Alegre N° 5.742, población Brasilia, de la comuna de San Miguel.



2° Que, acto seguido, la referida patrulla militar detuvo, sin derecho, a Luis Heriberto Contreras Peñaloza, de 16 años, miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hijo de Contreras Escamilla, en un inmueble de la población Carbomet de la comuna de San Bernardo.

3° Que, posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el Cerro Chena, lugar en que se les mantuvo encerrados, sin derecho y se les sometió a interrogatorios y malos tratos físicos y psicológicos.

4° Que, en esa época, el campo de prisioneros del Cerro Chena se encontraba a cargo del Capitán Víctor Raúl Pinto Pérez -actualmente fallecido- y el Teniente Alfonso Faúndez Norambuena, ambos del Ejército de Chile.

5° Que, asimismo, en el contexto temporal antes indicado, cumplieron funciones en el mencionado campo de prisioneros, como interrogadores, el Subteniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el Teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces -actualmente fallecido- y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.

6° Que el 15 de noviembre de 1973, al interior del referido campo de prisioneros, Luis Contreras Escamilla fue ejecutado, al margen del ordenamiento jurídico, mediante múltiples disparos con arma de fuego”.

15°) Que los hechos así establecidos, fueron calificados en el fundamento décimo tercero de la sentencia objetada, como constitutivo del delito consumado de **homicidio calificado, mediando alevosía**, perpetrado en la persona de Luis



Contreras Escamilla, previstos y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia primera, del Código Penal, de la época.

Por otra parte, los mismos hechos fueron calificado en el fundamento décimo noveno de la sentencia de primer grado, que el fallo impugnado hizo suyo, además, como constitutivo del delito consumado de **sustracción de persona mayor de diez años y menor de dieciocho años**, contemplado en el artículo 142 inciso penúltimo del Código Penal, perpetrados en la persona de Luis Contreras Peñaloza;

16°) Que, asimismo, los hechos ilícitos a los que se hizo referencia en el fundamento décimo cuarto precedente, fueron calificados como delitos de Lesa Humanidad. En efecto, el fundamento 20° del fallo de primer grado, hecho suyo por el de segunda instancia, señaló:

“...En este caso, las acciones ejecutadas afectaron la libertad, integridad física y psíquica y vida de Luis Heriberto Contreras Escamilla y, asimismo, la libertad y la integridad física y psíquica de su hijo Luis Heriberto Contreras Peñaloza, es decir, derechos humanos fundamentales, inherentes a todos los seres humanos, reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica y a la libertad ambulatoria se encuentran reconocidos y garantizados en el artículo 19 numerales 1 y 7 de nuestra Constitución y, a nivel internacional, en los artículos 6, 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

[...]



Por otra parte, se determinó que las acciones que afectaron la libertad, integridad física y psíquica y vida de Luis Heriberto Contreras Escamilla y, asimismo, la libertad y la integridad física y psíquica de su hijo Luis Heriberto Contreras Peñaloza fueron ejecutadas por funcionarios públicos, soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo y oficiales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, es decir, por agentes del Estado, infringiendo el mandato constitucional de abstención que pesaba sobre ellos, esto es, de no atentar en contra de la vida, integridad física y psíquica y libertad de las personas.

[...]

Las víctimas no sólo fueron ilegal y arbitrariamente privadas de su libertad sino que, estando bajo la custodia de agentes del Estado, fueron sometidas a malos tratos físicos y psicológicos e incluso una de ellas asesinada, acciones que, además de infringir el deber de respeto de los derechos humanos que como representantes del Estado correspondía a sus autores, se alejaron de los principios de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, ya que se ejecutaron al margen de toda consideración por la persona humana y su dignidad inherente.

Las condiciones fácticas descritas en los apartados que anteceden permiten, sin duda, aseverar que se cometieron en contra de Luis Heriberto Contreras Escamilla y de su hijo Luis Heriberto Contreras Peñaloza graves violaciones a los derechos humanos, puntualmente delitos brutales que no respetaron el estándar mínimo de reglas de coexistencia y que, por tanto, deben ser considerados crímenes contra la humanidad”.

17º) Que, sin perjuicio de la forma y oportunidad en que han sido deducidos los recursos de autos, por razones de coherencia procedimental y evitar



reiteraciones innecesarias, será analizado, en primer lugar, el recurso de nulidad sustancial impetrado por la defensa de Alfonso Faúndez Norambuena, para continuar con el interpuesto por el abogado Nelson Caucoto Pereira, en representación de los querellantes. Finalmente, se examinará el deducido por el abogado Ilan Sandberg Wiener, en representación del querellante Unidad Programa de Derechos Humanos.

Como se señaló en el considerando 2° *ut supra*, atendido que el sentenciado Sergio Heriberto Ávila Quiroga falleció el 30 de julio de 2022, se omitirá pronunciamiento respecto a los recursos de nulidad sustancial, deducidos por los acusadores particulares en contra de la decisión que lo absuelve de los cargos formulados en su contra, debiendo estarse a lo que la judicatura de primer grado resuelva a este respecto, conforme se dispondrá en lo resolutive de esta sentencia.

18°) Que antes del examen de los arbitrios deducidos, resulta oportuno consignar desde ya que el recurso de casación constituye una vía de impugnación de derecho estricto en cuanto impone al recurrente el cumplimiento de determinadas formas legales. Así lo establece el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable según la remisión expresa que contiene el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal a las disposiciones previstas en el párrafo 1° y 4° del Título XIX del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, según la primera de estas disposiciones, el libelo que contenga el recurso deberá expresar en qué consiste el o los errores de derecho, en los que se afirma habría incurrido la sentencia y, además, de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. No basta, en



consecuencia, la mera aseveración del error de Derecho reclamado, ni tampoco, la sola enunciación de normas legales, sino que debe precisarse con suficiente claridad y concatenamiento lógico-argumental en qué consiste la aplicación errónea de la ley penal, y exponerse, además, cómo el vicio denunciado constituye una o más de las causales taxativas que designa el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Esta exigencia obliga entonces a los impugnantes no sólo a expresar ordenada y lógicamente los presupuestos indicados, sino además, les impide proponer motivos de nulidad contradictorios unos de otros, pues ello implicaría trasladar indebidamente al fallador, la referida carga procesal a efectos de determinar si existe uno o más de los vicios alegados.

Un recurso de casación en el fondo que incurra en tales omisiones o contradicciones procesales, nunca podrá prosperar;

19°) Que, como se señaló, el recurso de casación en el fondo deducido por la defensa del sentenciado **Alfonso Faúndez Norambuena**, esgrime -en rigor- de manera conjunta y simultáneamente, las circunstancias primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, vicios de nulidad que se configurarían al habersele condenado como autor del delito de homicidio calificado y sustracción de persona mayor de diez años y menor de dieciocho años, en circunstancia que – alega - la prueba no cumple lo previsto en el artículo 488 N°1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, por lo que debió ser absuelto por falta de participación en el ilícito.

La circunstancia primera de la norma ya citada, supone necesariamente que los hechos fueron correctamente establecidos y que los mismos resultan



constitutivos de los delitos, para sostener igualmente la causal prevista en el 546 N° 7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los hechos asentados por el juzgador, que - por el contrario - los acepta al esgrimir el primer motivo de invalidación.

Como se ve, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto, el que, por tal motivo, será rechazado (SCS N° 19.165-17, de 27 de septiembre de 2017 y N° 35.788 de 20 de septiembre de 2018; 13877-2019, de 24 de diciembre de 2021; 12820-2019 de 8 de noviembre de 2021, entre otros).

En efecto, los vicios que constituyen las hipótesis invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte.

20°) Que tal forma de fundar la abrogación, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en el cual cabe demandar, para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo, que se señale y explique con precisión y fundamento los errores de derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial en su parte dispositiva, todo ello en correspondencia con las solicitudes efectuadas en su petitorio, características de las que carece un arbitrio que, como el revisado,



presenta fundamentos y peticiones alternativas y excluyentes, defectos que constituyen un óbice insalvable siquiera para su estudio;

21°) Que la jurisprudencia a este respecto es, como se ha visto, numerosa y sostenida, contando con decisiones muy recientes, que otorgan sólido respaldo a lo que se resuelve en estos casos, que es el rechazo de los recursos por razones que si bien son formales, no pueden ser obviadas por esta Sala, atendida la función que le está encomendada como tribunal de casación.

Sabido es que este tribunal no es una instancia de apelación, en que proceda revisar uno a uno todos los hechos establecidos, aunque su apreciación conduzca a conclusiones contradictorias. A este respecto no es necesario añadir nada más, que no sea el parecer de la doctrina procesalista divulgada a través de los textos conocidos;

22°) Que las contradicciones anotadas, resultan suficientes para desestimar el recurso deducido. Sin embargo, se han incurrido en otros yerros en su formalización, puesto que si bien en el recurso se denuncian como infringidos los cardinales del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal que tienen la calidad de reguladoras de la prueba, su lectura no muestra la imputación de haber sido violentada, pues plantea la presunta transgresión en que habrían incurrido los jueces, al haber tenido por comprobado que aquél estaba a cargo del campo de prisioneros ubicado en Cerro Chena, lugar donde las víctimas del proceso fueron mantenidas privadas de libertad, en circunstancia que – sostiene - fue un hecho controvertido por la defensa, no siendo admisible por tal razón, que fuera utilizado como base de una presunción judicial, manifestando a continuación su discrepancia en torno a la valoración a los elementos de convicción reunidos y



relacionados en el fallo – que en su concepto - no constituyen presunciones judiciales que reúnan los requisitos del artículo 488 ya citado, al incumplir con la exigencia de multiplicidad, como tampoco sustentarse en hechos reales y probados, disintiendo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso extraordinario, de naturaleza sustantiva y de derecho estricto, como se señaló.

23°) Que, dadas las consideraciones precedentes, representativas de graves imprecisiones en la formalización del individualizado libelo, contrarias a la naturaleza y fines de este recurso de nulidad, procede desestimar el promovido en autos en representación del condenado Alfonso Faúndez Norambuena.

24°) Que, en relación al recurso promovido por los querellantes, representados por el abogado Nelson Caucoto Pereira, como se reseñó, se sustenta en la causal de nulidad prevista en el numeral 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por el cual se denuncia la infracción a las normas reguladoras de la prueba contenida en el artículo 488 N°1 y 2 del mismo Código, por la no valoración en la sentencia impugnada de los diversos testimonios y prueba documental que constan en el proceso, de los que surgen múltiples hechos reales y probados, que sirvieron de base a las presunciones judiciales utilizadas por el sentenciador de primer grado para tener por acreditada la participación del acusado Roberto Arcángel Rozas Aguilera en los delitos, yerro que condujo a su absolución.

Sobre el particular, cabe destacar que el fallo de primera instancia, al hacerse cargo de la participación atribuida a este acusado, además de la prueba citada para el establecimiento de los hechos punibles, en el fundamento 25°, consideró - entre otros - los siguientes antecedentes:



i) Las imputaciones directas de **Ricardo Robinson Allup Rojas, Ricardo Yanko Valdivieso Ríos y Germán Nicolás Pérez Soto**, quienes, al igual que las víctimas, estuvieron privados de libertad en el campo de prisioneros del Cerro Chena con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, antes, de manera coetánea o después.

ii) Las declaraciones de **Víctor Raúl Pinto Pérez, Jorge Eduardo Romero Campos, Carlos Alberto Schmidtchen Vivanco, testigo con identidad reservada, Pablo Amador Mora Mora, Bernardo Enrique Jacob Cabezas Contreras, Juan Carlos Cáceres Gatica, José Ignacio Salinas Tudela y Luis Almazán Ferrada**, oficiales y soldados de dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo en la época de los hechos.

iii) Los dichos de **Hugo Jesús Medina Leiva, Mario Jesús Campos Ripley y Oscar Hernán Vergara Cruces**.

Del mérito de estos antecedentes, la judicatura de primer grado concluyó:

“...los hechos fueron ejecutados por una pluralidad de personas que se unieron con vocación de permanencia bajo estos fines, ya que de los diversos testimonios escuchados en el curso de la investigación, surgidos de soldados y oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo y de víctimas de privaciones ilegales de libertad, aparece que el centro de detención clandestino establecido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en el cuartel de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena se mantuvo varios meses en funcionamiento, período en que pasaron por sus instalaciones un número importante de personas que fueron sometidas a interrogatorios y malos tratos con el fin de obtener información acerca de sus actividades políticas, entre ellos, Luis



Contreras Escamilla y su hijo Luis Contreras Peñaloza, de 16 años, quienes estuvieron privados de libertad en ese lugar a partir del 10 de noviembre de 1973.

El concierto con que actuaron los agentes se colige de la organización existente en el mencionado centro de detención - incluso con horarios de trabajo - y de la división del trabajo criminal, ya que se distribuyeron las funciones de detener, interrogar, torturar, custodiar y alimentar a los detenidos, correspondiendo a cada uno de ellos una función esencial para el éxito del hecho, dominio funcional que según Roxin constituye la esencia de la coautoría.

En este caso, de acuerdo a lo expresado por los testigos mencionados precedentemente, Faúndez Norambuena, Magaña Bau, Ávila Quiroga y Rozas Aguilera estuvieron a cargo de interrogar a los detenidos en el campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al interior del Cerro Chena...”.

25°) Que, por su parte, la judicatura de segundo grado, para desestimar los cargos formulados en contra de Rozas Aguilera y, por el contrario, absolverlo, en el fundamento 20° de la sentencia impugnada, argumentó:

“...Con respecto a Roberto Rozas Aguilera, el testigo Mario Campos Ripley indica en su declaración, de fs. 1.936, que a petición de la Jefatura de la Escuela de Infantería de San Bernardo, se dispuso que los oficiales Oscar Vergara y Roberto Rozas colaboraran con la identificación de los detenidos que se encontraban privados de libertad en el cuartel de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena y que ellos permanecieron en el lugar un par de meses. A su vez, el testigo Oscar Vergara Cruces indicó, a fs. 1.933, que después del 11 de septiembre de 1973, junto al Detective Roberto Rozas Aguilera, fue



asignado al Cuartel de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el Cerro Chena, con el fin de prestar colaboración con el interrogatorio de detenidos, debiendo consignar en una ficha sus datos personales y si habían recibido instrucción militar. Que los interrogatorios se realizaban en un lugar aledaño a la “casa de techo rojo”, que dicha labor la cumplió por quince a veinte días, entre 8:30 y 12:30 horas.

Consecuentemente, conforme a la prueba descrita no se puede colegir, de manera indefectible, de que Rozas haya participado en los interrogatorios de los detenidos en el campo de prisioneros, y que haya formado parte de un grupo de oficiales concertado previamente para cometer ilícitos contra los detractores del gobierno. Más bien esta Corte ha resultado persuadida de que su intervención en las situaciones ocurridas al interior de tal lugar de reclusión no lo fueron de manera significativa, puesto que su participación quedaba limitada a proporcionar antecedentes policiales de las personas que eran trasladadas al campo de prisioneros”.

26°) Que en esas circunstancias, aparece claro que la judicatura de segundo grado al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento y absolver al acusado Roberto Arcángel Rozas Aguilera, ha incurrido en las infracciones a las normas reguladoras de la prueba denunciadas por el querellante, al estimar, en síntesis, según se evidencia del razonamiento antes transcrito, que la prueba de cargo resultó insuficiente para tener por configurada su participación de manera significativa en los hechos, mediante una reproducción incompleta de la prueba analizada y ponderada por el tribunal de primera instancia.



Así, la sentencia no explicita, no obstante que la responsabilidad penal es personal y no colectiva, cómo y porqué este acusado, carecen de la participación atribuida en los delitos materia de autos, como tampoco expresa las consideraciones tenidas en cuenta para omitir el análisis de aquellos antecedentes probatorios en los que el sentenciador de primer grado apoyó su determinación de condena, mismos que – como se señaló - los jueces recurridos estimaron útiles y creíbles para acreditar los hechos ilícitos, decidiendo su absolución, incurriéndose de esta forma, en el vicio denunciado.

Por el contrario, pese que del tenor de los hechos que se dieron por establecidos y conforme a una correcta aplicación del artículo 488 N°1 y N°2, primera parte, del Código de Procedimiento Penal, resultó comprobado que Rozas Aguilera, en su calidad de oficial de la Policía de Investigaciones destinado a trabajar en ese recinto militar, realizaba interrogatorios a los detenidos en el centro de detención clandestino de Cerro Chena, hecho de los que se desprenden que Rozas Aguilera voluntariamente tomó parte en la ejecución de los hechos delictuosos, en términos determinantes y con dominio funcional del hecho, permitiendo con ello prolongar el cautiverio de las víctimas, por lo que le ha correspondido participación en calidad de coautor, en los términos previstos en el artículo 15 N°1 del Código Penal, al haber tomado parte en la ejecución de los hechos, a través de su aportación funcional al mismo;

27°) Que, en consecuencia, y en lo relativo a la absolución del acusado Roberto Arcángel Rozas Aguilera, la sentencia impugnada incurre en las infracciones denunciadas en el recurso de casación en examen – fundado en la causal prevista en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal -, desde



que del mérito de lo narrado por el propio acusado y los demás elementos de prueba que obran en autos, mencionados en el fundamento 24° *ut supra*, no valorados por la judicatura de segundo grado, se ha podido determinar que al haber sido destinado como Oficial de la Policía de Investigaciones a interrogar a los detenidos en el recinto clandestino ubicado al interior de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el Cerro Chena, ejecutó materialmente los ilícitos, en cumplimiento de las directrices entregadas por la superioridad de mando, por lo que Rozas Aguilera disponían del co-dominio del hecho, contribuyendo de manera funcional a la ejecución del mismo en su totalidad, colaborando de esa manera y en forma determinante a que se mantuviera la privación de libertad de las víctimas Luis Heriberto Contreras Escamilla y Luis Heriberto Contreras Espinoza;

28°) Que, en consecuencia, se acogerá la causal de nulidad en examen, del recurso de casación en el fondo impetrado por los querellantes representados por el Abogado Sr. Caucoto Pereira, toda vez que los jueces del fondo al absolver a Rozas Aguilera, restaron de todo valor a los medios de prueba legales, consistente en prueba testimonial, confesional y documental, infringiendo de esta manera los numerales 1 y 2, primera parte, del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 15 N°1 y 141 del Código Penal, yerros jurídicos que influyeron en lo dispositivo de la sentencia, desde que condujo a la absolución del referido encartado, razón por la que se anulará la sentencia impugnada a este respecto, dictándose una en su reemplazo de conformidad a la ley;

29°) Que, resultando innecesario abordar las causales de nulidad sustancial denunciadas en el libelo recursivo impetrado por el abogado Ilan Sandberg



Wiener, en representación del querellante Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio del ramo, en el que se solicita a esta Corte que en la sentencia de reemplazo se condene a Roberto Rozas Aguilera como autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Luis Contreras Escamilla, aspecto que ya fue abordado al analizar el recurso de nulidad sustancial deducido por la parte querellante, representada por el abogado Nelson Caucoto Pereira, acogiendo el mismo, se omitirá pronunciamiento a su respecto.

III. Casación de oficio.

30°) Que no obstante el rechazo del arbitrio de casación en el fondo deducido por la defensa de Alfonso Faúndez Norambuena por defectos de formalización, del estudio de estos antecedentes esta Corte ha observado la incorrecta aplicación de la ley, al haberse calificado los hechos que afectaron a Luis Heriberto Contreras Escamilla como constitutivos del delito de homicidio calificado, atribuyéndole participación al referido sentenciado en calidad de “autor mediano” en los términos descritos en el “artículo 15 N°3” del Código Penal en el referido ilícito, al encontrarse a cargo del campo de prisioneros del Cerro Chena, junto al Capitán Víctor Raúl Pinto Pérez, actualmente fallecido.

31°) Que, por otro lado, como ya se ha esbozado, adicionalmente los sentenciadores estimaron, según da cuenta el considerando 16°) que antecede, que los hechos fueron cometidos en un contexto de ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil, lo que determinó que los ilícitos establecidos fueran además considerados como crímenes de lesa humanidad, por atentar contra normas *ius cogens* del Derecho Internacional Humanitario, y por lo mismo, sometidos a dicho estatuto jurídico internacional.



32°) Que, es bajo este contexto, que el fallo de primer grado, le atribuyó participación al mencionado acusado a título de coautor del delito de secuestro calificado perpetrado en la persona de Luis Contreras Escamilla, por tratarse de un Teniente del Ejército de Chile, a cargo del campo de prisioneros del Cerro Chena, interrogar a los detenidos y ejercer mando directo sobre los soldados que estuvieron a cargo de la alimentación y custodia de los detenidos, conforme se expresó en el fundamento 26° de la sentencia de primer grado.

33°) Que, para analizar la especial forma de autoría en que se pueden cometer estos delitos, resulta relevante analizar si los partícipes tuvieron dominio del hecho, en términos tales que: a. En la conducta del *autor inmediato* que realiza y controla objetiva y subjetivamente el hecho de propia mano; b. En el dominio de la voluntad como sucede en los casos de *autoría mediata*; c. En los casos de *dominio funcional* como ocurre en el caso de la *coautoría*.

Será ***autor inmediato o directo***, quien realiza directa, materialmente o de propia mano, en todo o en parte, la conducta descrita en el tipo penal, siéndole objetiva y subjetivamente imputable el hecho punible. El autor inmediato es el señor del hecho, porque conserva el poder de decidir autónomamente sobre la prosecución del acontecimiento delictivo hasta su consumación.

Así, en todo delito comisivo doloso como en el investigado en estos autos, debe considerarse como autor inmediato o de propia mano, a quien realiza materialmente todos los presupuestos que contiene la descripción del tipo penal, como asimismo, lo será quien ejecuta materialmente el encargo de otro, si concurren en dicha ejecución todos los presupuestos del hecho típico.



Por su parte, el **autor mediato** es quien ejecuta un hecho propio a través de otro cuya conducta instrumentaliza. Es el que dominando el hecho y poseyendo las demás características especiales de la autoría, se sirve de otra persona denominada *instrumento*, para ejecutar la conducta típica. En la autoría mediata el *dominio del hecho* presupone que el acontecimiento global se presenta como obra de la voluntad directiva del hombre de atrás y que éste controla la conducta del ejecutor por medio de su influencia sobre él.

Finalmente, serán **coautores**, quienes ejecutan conjuntamente y de mutuo acuerdo (expreso o tácito) el hecho, dividiéndose la realización del plan, en términos tales que disponen del co-dominio del hecho, sobre cuya consumación deciden en conjunto, porque cada una de las contribuciones separadamente consideradas es funcional a la ejecución del hecho en su totalidad. En la coautoría existe un dominio funcional, porque los autores se reparten la realización del hecho, se “dividen el trabajo”, de manera que ninguno de ellos dispone de su total realización, sino que lo cometen entre todos. En palabras de Bacigalupo: *“el elemento esencial de la coautoría es el co-dominio del hecho. Este elemento ha sido caracterizado por Roxin como un dominio funcional del hechor en el sentido de que cada uno de los coautores tiene en sus manos el dominio del hecho a través de la parte que le corresponde en la división del trabajo”* (Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal, Parte General. 2da, edición renovada y ampliada, Hammurabi, Buenos Aires, p. 501);

34°) Que, sobre la coautoría, Roxin señala que *“lo peculiar de la coautoría es que cada individuo domina el acontecer global en cooperación con los demás (...) el dominio completo (del hecho) reside en las manos de varios, de manera*



que éstos sólo pueden actuar conjuntamente, teniendo así cada uno de ellos en sus manos el destino del hecho global.” (ROXIN, Claus, Autoría y Dominio del hecho en Derecho Penal, 7° edición, Marcial Pons Librero Editor, Madrid, 2000, p. 307-308).

Por su parte, el profesor Cury ha manifestado que *“para que exista coautoría, es indispensable que los distintos intervinientes presten a la realización del hecho una contribución que haga “funcionar” el plan conjunto que sea funcional a la realización del hecho, de tal manera que si uno de ellos la retira el proyecto fracasa; pero, al mismo tiempo, la actividad de cada cual es, a su vez, dependiente de que los restantes realicen la suya, porque por sí sola es incapaz de conducir a la consumación”. “No es necesario que el coautor intervenga directamente en el hecho típico, [...] basta que su contribución sea decisiva para la consumación...” (Enrique Cury, Derecho Penal, Parte General, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2011, pp. 611-613).*

Por ello, los coautores intervienen ejecutando un aporte funcional a la realización mancomunada o colectiva del plan en su conjunto, por lo que les será aplicable el principio de imputación recíproca, conforme al cual, todo lo que haga cada uno de los coautores dentro del marco del acuerdo de voluntades, les es imputable a los demás;

35°) Que, en consideración a las reflexiones antes efectuadas, y en lo relativo a la participación del acusado Alfonso Faúndez Norambuena, la sentencia impugnada incurre en un error de derecho con influencia en lo dispositivo del fallo, desde que los hechos establecidos, mencionados en el fundamento 18° y 26° de la sentencia de primer grado, se ha podido determinar que al haberse



desempeñado como Teniente del Ejército, a cargo del campo de prisioneros del Cerro Chena Reserva, interrogar a los detenidos y ejercer el mando directo sobre los soldados que estuvieron a cargo de la alimentación y custodia de los detenidos, disponía del co-dominio del hecho, contribuyendo de manera funcional a la ejecución del hecho en su totalidad, formando parte de la agrupación represiva que ideó y decidió la privación de libertad de la víctima, colaborando de esa manera y en forma determinante con mantener su encierro;

No se trata, entonces, de una intervención propia de autoría mediata del delito de homicidio calificado perpetrado en contra de la víctima Luis Contreras Escamilla, sino más bien de la realización de actos ejecutivos, aportando de manera funcional a la realización mancomunada o colectiva del plan en su conjunto, aceptada expresa o tácitamente, con conocimiento y voluntad de participar en ellos, los que bajo el principio de imputación recíproca, resultan constitutivos de coautoría, en los términos previstos en el artículo 15 N°3 del Código Penal.

36°) Que apartándose de las reflexiones antes anotadas, la judicatura de segundo grado, califica la participación de Faúndez Norambuena, como autoría mediata, al tiempo que encuadra su participación criminal en el artículo 15 N°3 del Código Penal, advirtiéndose un primer error de derecho, pero que no tiene influencia en lo dispositivo del fallo, pues ambas formas de intervención en los hechos delictivos, se sancionan de la misma forma.

Sin embargo, se incurre en un segundo error de derecho que incide directamente en lo dispositivo de esa determinación, desde que apartándose de los hechos que fueron establecidos por la judicatura de primer grado, contenidos



en el fundamento 18 y 26°, como se señaló, y que la sentencia de segundo grado declara reproducir; establece que *“Faúndez Norambuena actuó como jefe de los agentes ejecutores en la materialización de los hechos investigados, aprovechándose de su competencia o ascendencia sobre el resto del personal para que se cometieran delitos”*, conclusión desprovista de los elementos de convicción en los que se apoya, dando por cierto que los soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo que detuvieron a Luis Contreras Escamilla y lo mantuvieron privado de libertad en el centro de detención ubicado en Cerro Chena, fueron quienes lo ejecutaron mediante múltiples disparos con arma de fuego y que en tales sucesos delictuosos, Faúndez Norambuena se aprovechó de su competencia o ascendencia sobre ellos para cometer el delito, hechos que no se ha tenido por acreditado por los jueces del fondo, tras la valoración de la prueba de cargo.

La sentencia no explicita, entonces, cómo y por qué este acusado se aprovechó del mando que detentaba para perpetrar el ilícito de homicidio calificado, como tampoco expresa las consideraciones tenidas en cuenta para concluir que los soldados a su cargo, fueron los que finalmente ultimaron a la víctima, omitiendo el análisis de aquellos antecedentes probatorios en apoyo de su determinación de condena, incurriéndose de esta forma, en infracción los artículos 15 N° 3 y 391 N°1 del Código Penal, al omitir las exigencias de fundamentación de las sentencias, prevista en el artículo 500 N° 4 del Código de Procedimiento Penal, lo que condujo a imponer a este encartado una pena mayor a la que resultaba procedente, al condenarlo como autor del delito de homicidio calificado, motivo por el cual, de conformidad a lo previsto en el artículo 785 del Código de



Procedimiento Civil, esta Corte actuará de oficio para corregir la incorrecta aplicación de la ley, casando de oficio la sentencia recurrida en este ámbito, como se dispondrá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 14, 15, 141 y 391 N°1 del Código Penal, 10, 500, 535, 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, y 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se decide:**

I. Se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por el abogado Ilan Sandberg Wiener, en representación de la parte querellante Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno.

II. Se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación del condenado Alfonso Faúndez Norambuena, en contra de la misma sentencia.

III.- Se acoge el recurso de casación en el fondo impetrado por el abogado Nelson Caucoto Pereira, en representación de los querellantes Eloiza Peñaloza Méndez y Heriberto Contreras Peñaloza, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel antes referida, la que **se anula sólo en cuanto en ella se absuelve** al acusado Roberto Arcángel Rozas Aguilera y en su reemplazo se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que se conforme a la ley y al mérito del proceso.

IV. Se anula de oficio la aludida sentencia, sólo en cuanto en ella se **condena** al sentenciado Alfonso Faúndez Norambuena, en calidad de autor en los



términos descritos en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, del delito de homicidio calificado, mediando alevosía, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia primera, del mismo Código, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

V.- En consecuencia, la sentencia dictada en estos autos por la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha treinta de diciembre del veintiuno, es parcialmente válida, con la sola anulación de lo referido en los acápites III y IV de esta decisión.

VI.- Se omite pronunciamiento respecto al recurso de casación en el fondo deducido por la parte querellante Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en virtud de lo señalado en el fundamento 29°) de esta sentencia.

El Ministro en Visita Extraordinario deberá dictar la resolución que en derecho corresponda, con ocasión del fallecimiento del sentenciado Sergio Heriberto Ávila Quiroga, conforme a lo razonado en el considerando 2°) y 17°) de esta sentencia.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sra. Dahm.

Rol N° 5.540-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Diego Simpertigue L., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C. y Carolina Coppo D. No firman



los Ministros Sres. Brito y Dahm, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber ambos cesado en sus funciones.

DIEGO GONZALO SIMPERTIGUE
LIMARE
MINISTRO
Fecha: 27/02/2024 13:23:13

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/02/2024 13:23:13

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/02/2024 13:23:14



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro Diego Gonzalo Simpertigue L. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Carolina Andrea Coppo D. Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento de lo ordenado por el fallo de casación que antecede y lo prescrito en los artículos 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce íntegramente el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, a excepción de los considerandos 10°, 13°, 14°, 19°, 20°, 21°, 22°, 24° y 25°, los que se eliminan.

Se reiteran, asimismo, los fundamentos 24°, 26°, 27°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35° y 36° de la sentencia de casación que antecede.

Y SE TIENE, EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE:

1° Que la participación de Alfonso Faúndez Norambuena y Roberto Arcángel Rozas Aguilera, en los términos descritos en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, de los delitos de secuestro calificado cometido en contra de Luis Heriberto Contreras Escamilla y del delito de sustracción de persona mayor de diez años y menor de dieciocho años, cometido en contra de Luis Heriberto Contreras Peñaloza, se encuentra suficientemente acreditada con el mérito de las declaraciones prestadas en el proceso de los testigos Ricardo Robinson Allup Rojas, Ricardo Yanko Valdivieso Ríos y Germán Nicolás Pérez Soto; con la declaración de los testigos Víctor Raúl Pinto Pérez, Jorge Eduardo Romero Campos, Carlos Alberto Schmidtchen Vivanco, testigo con identidad reservada, Pablo Amador Mora Mora, Bernardo Enrique Jacob Cabezas Contreras, Juan Carlos Cáceres Gatica, José Ignacio Salinas Tudela, Luis Almazán Ferrada, Hugo Jesús Medina Leiva, Mario Jesús Campos Ripley y Oscar Hernán Vergara Cruces; desde que de los hechos establecidos, se ha podido determinar que Faúndez Norambuena se desempeñó como encargado del campo de prisioneros del Cerro Chena e interrogador, y Rozas Aguilera se desempeñó como interrogador de los detenidos en el periodo en que ambas víctimas estuvieron privadas de libertad en ese centro clandestino, con conocimiento que allí se mantenían a personas



detenidas, sometidos a interrogatorios bajo tortura, de manera que disponían del co-dominio del hecho, contribuyendo de manera funcional a la ejecución del hecho en su totalidad, formando parte de la agrupación represiva que ideó y mantuvo la privación de libertad de ambas víctimas colaborando de esa manera y en forma determinante con su cautiverio, pues esas labores permitieron someter a las víctimas y mantener su privación de libertad;

En consecuencia, esta Corte comparte los fundamentos 21°, 24°, 25° y 26° de la sentencia apelada, razón por lo que la misma será confirmada.

2° Que, en consecuencia, favoreciendo al acusado Alfonso Faúndez Norambuena una circunstancia atenuante –*la prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal*- y no perjudicándole agravantes, la pena que a la fecha de ocurrencia de los hechos (noviembre de 1973) traía aparejada a los delitos por los que han resultado condenado, por disposición del artículo 68 del mismo cuerpo de normas la misma no podían ser aplicada en su grado máximo, de lo que se sigue que la pena determinada en el fallo apelado fue correctamente impuesta.

Por su parte, favoreciendo al acusado Roberto Rozas Aguilera dos circunstancias atenuantes –*artículo 11 N°6 y 9 del Código Penal*-, sin la concurrencia de agravantes, el tribunal se encontraba facultado para rebajar la pena en un grado desde el mínimo de las previstas en la ley para cada delito, como se efectuó en la sentencia apelada, conforme a lo establecido en el artículo 68 inciso tercero y 67 inciso cuarto del Código Penal, por lo que la sentencia también deberá ser confirmada en este aspecto.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 509 y siguientes del Código del Procedimiento Penal, **se confirma en lo apelado y aprueba en lo consultado**, la sentencia dictada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, por la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marianela Cifuentes Alarcón.

Regístrese y devuélvase, con sus tomos y agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.



Rol N° 5.540-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Diego Simpertigue L., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C. y Carolina Coppo D. No firman los Ministros Sres. Brito y Dahm, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber ambos cesado en sus funciones.

DIEGO GONZALO SIMPERTIGUE
LIMARE
MINISTRO
Fecha: 27/02/2024 13:23:16

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/02/2024 13:23:17

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/02/2024 13:23:18



En Santiago, a veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

